

Antofagasta, a diez de noviembre de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

Comparece don Stephen Kendall Craig, abogado, defensor penal público, en favor de los condenados Kristopher Alejandro Useche Useche y Héctor José Quintero Ambrosino, ambos de nacionalidad venezolana y privados de libertad en el Centro Penitenciario de Tocopilla, en internación provisoria a la espera de la ejecución de la pena sustitutiva de expulsión dispuesta en causa RIT 3980-2021, RUC 2100276977-5 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, quien deduce acción constitucional de amparo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, en contra del Director Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, don Richard Bórquez Duque y en contra del Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones don Carlos Olate Carrillo, por el incumplimiento de lo resuelto en sentencia de 14 de junio 2022, solicitando que, debido al tiempo transcurrido, se ordene materializar la expulsión en el plazo de 10 días corridos.

Informaron los recurridos, al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la acción de autos se interpone en contra del Director Regional de Antofagasta y del Servicio Nacional de Migraciones y el Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones, por



el incumplimiento de la expulsión de los amparados del territorio nacional, dispuesta en sentencia de 14 de junio de 2022, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, situación que vulnera las garantías contenidas en el artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales ratificados por Chile.

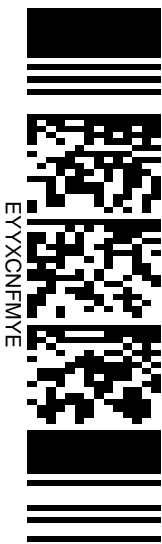
Fundó la acción en que cada uno de los amparados fueron condenados a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 40 UTM., como autores del delito consumado de tráfico de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000, pena de multa que se dio por cumplida por el tiempo que permanecieron en prisión preventiva por esta causa, sustituyendo la pena de cinco años de cárcel por la expulsión del territorio nacional conforme al art. 34 de la Ley 18.216 otorgando un plazo de sesenta días para su ejecución, disponiendo la medida cautelar de internación provisional de ambos condenados en tanto se ejecutaba, sentencia cuya ejecutoria se certificó con fecha 29 de junio de 2022.

Añade que con fecha 29 de agosto del 2022 venció el plazo fijado para que el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior procedieran ejecutar la expulsión de ambos amparados, mediante su traslado vía aérea a su país de origen, razón por la que se solicitó al Juzgado de garantía de Antofagasta que se reiterara oficio al Ministerio del Interior para efectos de que se ejecutara la expulsión, oficio fue remitido con fecha 20 de septiembre del presente, transcurriendo, a la fecha de interposición del recurso, más de 143 días desde que se dispuso su expulsión, lo que a su juicio inciden las actuaciones y omisiones de los recurridos.



Respecto de la Dirección del Servicio Nacional de Migraciones, señala que corresponde a dicho Servicio realizar todos los trámites administrativos migratorios a fin de obtener la documentación respectiva para la salida del país de los condenados y que a la fecha no se ha entregado ninguna justificación del retardo en la ejecución de la expulsión, mientras que, la ejecución material de la expulsión, consistente en el traslado por vía aérea de los condenados a su país de origen, esto es Venezuela, está a cargo también del Departamento de migraciones y policía internacional de la PDI, entidad que tampoco ha comunicado ningún motivo o justificación del retardo, incurriendo ambas instituciones en un actuar arbitrario e ilegal, que constituyen una situación amparada por el artículo 21 de la Constitución Política de la República, toda vez que el actuar de los recurridos los mantiene internados y privados de libertad.

**SEGUNDO:** Informó el Prefecto Inspector Hernán Solís Catalán, Jefe Región Policial de Antofagasta, por la Policía de Investigaciones de Chile, señalado que luego de dictada la sentencia con fecha 09 de agosto de 2022 se ofició al Servicio Nacional de migraciones para tramitar una prórroga para materializar la expulsión, toda vez que los condenados si bien contaban con pasaportes venezolanos, estos se encuentran vencidos y que desde esa fecha se han remitido en varias oportunidades diversos correos electrónicos a las casillas del Consulado Venezolano en Chile, sin respuesta en relación a la verificación de identidad y obtención de un salvoconducto y/o pasaporte especial que permitan dar cumplimiento a la expulsión de los condenados, solicitando

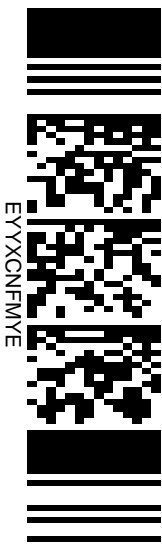


con fecha 25 de agosto a la sección de Expulsiones de JENAMIG interceder ante el referido consulado para obtener verificación de identidad de siete extranjeros de dicha nacionalidad entre los cuales se encuentran los amparados.

Con el mismo objetivo, con fecha 21 de septiembre se remitió oficio al Jefe de la brigada Ministerio de Relaciones Exteriores de la institución, solicitándole igualmente interceder ante el referido consulado. Agrega que como se aprecia del oficio que acompaña, los amparados se encuentran en el lugar sexto y séptimo de dicha lista, en orden de antigüedad conforme a la fecha de su sentencia, y añade que con fecha 03 de noviembre del presente, el consulado confirmó identidad del extranjero que figura en el número uno de dicha lista, con sentencia dictada en de marzo de 2022.

**TERCERO:** Informó Guillermo Quezada Bruzzzone, abogado de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de amparo, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente a lo consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Señala que el servicio no tiene injerencia en la materialización y ejecución de dicha expulsión, toda vez que el origen de dicha medida está radicado en la sustitución de una pena privativa de libertad, conforme a lo que dispone el artículo 34 de la Ley 18.216, en relación con el artículo 126



inc. 2° y artículo 166 N°4 de la Ley N°21.325, haciendo presente que el Servicio Nacional de Migraciones, cumple con gestionar la compra de pasajes aéreos del extranjero sujeto a expulsión judicial, una vez que Policía de Investigaciones de Chile ha recibido la documentación de viaje y confirmación de identidad emitida por el respectivo consulado, cuestión que a la fecha no ha ocurrido.

**CUARTO:** Que el recurso de amparo se ha establecido en favor de todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes o respecto de la persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual, debiéndose adoptar las medidas que se estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

**QUINTO:** Que atendido el tenor de lo cuestionado por la parte recurrente, el punto que debe dilucidarse es si el retardo en la ejecución de la expulsión del territorio nacional ordenada en la sentencia dictada con fecha 14 de junio de 2022 cuya ejecutoria se certificó el 29 del mismo mes, deriva de algún un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, atribuible a alguna de las recurridas.

**SEXTO:** Que, de los antecedentes arribados a la causa, consistentes en los diversos informes evacuados por las recurridas, resulta evidente que la dilación en la ejecución del proceso de expulsión del territorio nacional del amparado no obedece a acciones u omisiones atribuibles a alguna de las



recurridas, sino más bien a complicaciones de carácter diplomático. En este sentido resulta esclarecedor lo informado por Jefe Región Policial de Antofagasta, por la Policía de Investigaciones de Chile, que da cuenta de las diversas gestiones realizadas por la institución en orden a obtener la verificación de identidad de un grupo de extranjeros en la misma situación de los amparados de autos de parte del Consulado Venezolano, sin que a la fecha haya obtenido respuesta favorable de dicho agente diplomático respecto de los recurrentes imposibilitando así ejecutar su expulsión.

**SÉPTIMO:** Que en consecuencia, no advirtiéndose que la dilación en la ejecución de la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional con la que fueron beneficiados los amparados, condenados por el delito consumado de tráfico ilícito de drogas en calidad de autores del a cinco años de presidio menor en su grado máximo, derive de una ilegalidad o arbitrariedad de alguna de las recurridas, necesariamente debe rechazarse la acción deducida.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema del 19 de diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, **SE RECHAZA sin costas,** el recurso de amparo interpuesto por Stephen Kendall Craig, abogado, Defensor Penal Público, en representación de los condenados Kristopher Alejandro Useche Useche y Héctor José Quintero Ambrosino, en contra del Director Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Migraciones y del Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de

EYYXCNFME



Investigaciones.

Regístrese y comuníquese.

**ROL 335-2022 (AMPARO)**



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Dinko Franulic C., Jasna Katy Pavlich N., Jaime Anibal Rojas M. Antofagasta, diez de noviembre de dos mil veintidós.

En Antofagasta, a diez de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.